

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL  
SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL  
MAGISTRADA PONENTE: MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA

PROCESO	ORDINARIO
DEMANDANTE	MARÍA ADALGISA ARAQUE BARRERA
DEMANDADO	COLPENSIONES
PROCEDENCIA	JUZGADO VEINTIUNO LABORAL DEL CTO DE MEDELLÍN
RADICADO	05001-31-05-021-2020-00195-01
SEGUNDA INSTANCIA	APELACIÓN AMBAS PARTES
TEMAS Y SUBTEMAS	RETROACTIVO PENSIONAL – NOVEDAD DE RETIRO
DECISIÓN	REVOCA PARCIALMENTE

SENTENCIA No.246

Medellín, treinta y uno (31) de octubre de dos mil veintidós (2022)

En atención a lo previsto en el decreto 806 de 2020 convertido en legislación permanente a través de la Ley 2213 de 2022, una vez discutido y aprobado en la SALA QUINTA DE DECISION LABORAL el presente asunto, según consta en Acta N°057 de 2022, se procede a dictar SENTENCIA en orden a resolver los RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por los apoderados judiciales de la **DEMANDANTE** y **COLPENSIONES**, así como el GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA en favor de esta última, respecto de la Sentencia del 15 de febrero de 2022, proferida por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín.

ANTECEDENTES

La señora **MARÍA ADALGISA ARAQUE BARRERA** presentó demanda ordinaria laboral en contra de **COLPENSIONES** con el fin de que: **1)** Se declare que tiene derecho al pago del retroactivo de mesadas de la pensión de vejez, generado desde el 1 de diciembre de 2016 hasta el 1 de junio de 2019, con las respectivas mesadas adicionales. **2)** Así mismo, solicitó el pago de los intereses moratorios reglados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, causados desde el 28 de julio de 2019, o la indexación de las sumas resultantes.

Sustentó sus pretensiones en que, nació el 3 de junio de 1950, y efectuó cotizaciones al sistema de pensiones desde el 6 de septiembre de 1977 hasta el 30 de noviembre de 2016, tiempo en el que laboró como empleada del servicio doméstico de la señora Irma del Carmen Canastero Montoya, entre otras, personas con quien laboró hasta el 5 de marzo de 2016, fecha en que le fue cancelada la liquidación de prestaciones sociales, reportándose cotizaciones en materia pensional hasta el 30 de noviembre de 2016, previo reporte de la respectiva novedad de retiro el día 4 de noviembre de ese año.

Que el 16 de junio de 2017 adelantó proceso judicial en contra de la señora Irma del Carmen Canastero Montoya y Elvia Montoya, Rad. 005-2017-00536, cuya pretensión era obtener el pago de los aportes a pensión en cabeza de aquellas por los años 1994 a 2008, y varios ciclos de 2009, 2011, 2012 y 2013, reportados como faltantes, litigio que culminó con acuerdo conciliatorio en audiencia del 16 de abril de 2018, en el que las demandadas se comprometieron a cancelar los aportes a pensión adeudados.

Que el 18 de diciembre de 2018 **COLPENSIONES** efectuó el cálculo actuarial respectivo, a efectos de proceder a actualizar su historia laboral. Luego, expuso que el 28 de marzo de 2019 reclamó a **COLPENSIONES** el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, toda vez que cumplió los requisitos de edad y semanas, y además estaba reportada la novedad de retiro, petición a la que accedió la entidad en Resolución SUB 144874 del 10 de junio de 2019, a través de la cual le otorgó la prestación aludida en cuantía equivalente al SMLMV, a partir del 1 de junio de 2019.

Posteriormente, el 6 de noviembre de 2019 solicitó a la demandada el pago del retroactivo generado desde el 1 de diciembre de 2006, junto a los intereses moratorios, petición negada en Resolución SUB 268 del 2 de enero de 2020 (f. 1 a 8 Archivo 02 ED).

### POSICIÓN DE LA ACCIONADA

La demandada **COLPENSIONES** dio contestación al gestor, oponiéndose a las pretensiones de la demanda, manifestando que, si bien la última cotización que se reporta de la demandante es para el ciclo 2016-11, para que haya lugar al retroactivo debe, además de acreditarse el cumplimiento de los requisitos legales, tener reporte de la novedad de retiro de la afiliada por parte del último empleador.

En consonancia, propuso las excepciones de “(...) *INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE RELIQUIDAR LA PENSIÓN DE VEJEZ; INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE RECONOCER RETROACTIVO PENSIONAL; AUSENCIA DE VICIOS EN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS; IMPROCEDENCIA DE INTERESES MORATORIOS; IMPROCEDENCIA DE LA INDEXACIÓN; IMPOSIBILIDAD DE CONDENA EN COSTAS O DE LA ATENUACIÓN DE LAS MISMAS, BUENA FE DE COLPENSIONES, COMPENSACIÓN y PRESCRIPCIÓN* (...)” (f. 2 a 18 Archivo 06 ED).

### SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Surtido el trámite de primera instancia, mediante Sentencia del 15 de febrero de 2022, el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín dispuso condenar a **COLPENSIONES** a reconocer y pagar a la señora **MARÍA ADALGISA ARAQUE BARRERA**, la suma de \$26.095.460 por concepto de retroactivo pensional adeudado entre el 1 de diciembre de 2016 y el 30 de mayo de 2019, suma que dispuso, fuese cancelada de manera indexada. Así mismo, autorizó a la accionada a descontar del monto a pagar lo correspondiente por aportes en salud. Y gravó con costas a la demandada.

### RECURSO DE APELACIÓN

La apoderada de la parte **DEMANDANTE** recurrió tal decisión solicitando que el retroactivo le sea reconocido desde la novedad de retiro o después de la primera semana del mes de noviembre de 2016, pues si bien se tuvo en cuenta lo dicho en la conciliación suscrita

entre la señora **MARÍA ADALGISA ARAQUE BARRERA** y la empleadora IRMA DEL CARMEN CANASTERO MONTOYA, en concordancia con la historia laboral, la obligada solo canceló una semana del mes de noviembre de ese año. Así mismo, respecto del reporte de la novedad de retiro, explicó que ese trámite lo realiza el empleador, y en el caso de la demandante, su última patrona no accedió a realizar el registro respectivo. Luego, en lo referente a los intereses moratorios, indicó que, al momento de la reclamación de la pensión, la parte allegó toda la documental en la que demostraba lo ocurrido en su caso particular, petición que fue reiterada con posterioridad, denotando que no hubo buena fe de **COLPENSIONES**.

El apoderado de **COLPENSIONES**, por su parte, solicitó la revocatoria de la condena en costas, pues debe tenerse en cuenta la actitud del condenado a lo largo del proceso, resaltando que fue diligente e incluso conciliadora, máxime que la condena fue interpuesta en virtud de la aplicación del precedente jurisprudencial.

El asunto se estudiará igualmente en virtud del grado jurisdiccional de consulta en favor de la entidad demandada, conforme lo dispone el artículo 69 del CPT y SS.

### **ALEGATOS DE CONCLUSION**

Dentro del término legal otorgado el apoderado de **COLPENSIONES** solicitó revoca la sentencia de primera instancia, señalando que frente al disfrute de la pensión se tiene en cuenta hasta la última semana cotizada no siendo posible tener en consideración la nueva solicitud de la parte actora.

Frente al pago de los intereses moratorios consagrado en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, indicó que es menester que concurren dos requisitos a saber; el primero que exista una pensión legalmente reconocida y que la administradora encargada de efectuar el pago haya incurrido en mora en el pago de la mesada pensional (Archivo 04 ED).

De otro lado, la parte **ACTORA**, señaló que la entidad de seguridad social demandada pago de manera tardía la pensión reconocida, tal como lo enseña la documental adosada al plenario, como quiera que no realizó la cancelación de dicha prestación de manera completa (Archivo 05 ED).

### **PROBLEMA JURÍDICO**

El problema jurídico que ocupa la atención de la Sala gravita en establecer si la demandante tiene derecho al retroactivo pensional causado entre el 1 de diciembre de 2016 y el 30 de mayo de 2019. En caso positivo, habrá de estudiarse la procedencia de los intereses moratorios reglados por el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 o la indexación de las sumas resultantes.

Se procede entonces a resolver los planteamientos previos las siguientes,

### **CONSIDERACIONES**

Como supuestos de hecho debidamente demostrados en el *sub-lite* se tienen los siguientes:

(i) Que la señora **MARÍA ADALGISA ARAQUE BARRERA** nació el 3 de junio de 1950 conforme lo muestra la copia del documento de identidad visible a folio 12 Archivo 02 ED.

(ii) Que la demandante realizó aportes a **COLPENSIONES**, acumulando a corte del 30 de noviembre de 2016 un total de 1.263,43 semanas de cotización, incluyendo los periodos cancelados el 28 de diciembre de 2018 a través de cálculo actuarial pagado por la empleadora IRMA DEL CARMEN CANASTERO MONTOYA, en cumplimiento de lo acordado en Acta de Conciliación suscrita entre aquella y la demandante en el marco del proceso Ordinario Laboral iniciado por la accionante en contra de aquella, conocido por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín -Rad. 005-2017-00536 (f. 14 a 27 y 46 a 48 Archivo 02 ED).

(iii) Que a través de la Resolución SUB 144874 del 10 de junio de 2019, **COLPENSIONES** le reconoció a la demandante la pensión de vejez, a partir del 1 de junio de 2019, en cuantía de \$828.116, de conformidad con lo establecido en el Decreto 758 de 1990, como beneficiaria de la transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 (f. 28 a 32 Archivo 02 ED).

(iv) Que el 6 de noviembre de 2019 la señora **ARAQUE BARRERA** solicitó a **COLPENSIONES** el reconocimiento y pago del retroactivo de mesadas causado desde el 1 de diciembre de 2016, pedimento despachado de manera negativa en Resolución SUB 268 del 2 de enero de 2020, tras concluir que no hubo reporte de novedad de retiro (f. 36 a 42 Archivo 02 ED).

### **DEL RETROACTIVO PENSIONAL**

Vista la forma como quedó delimitado el debate, valga recordar que el artículo 13 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado mediante Decreto 758 del mismo año, dispone que la pensión de vejez se reconocerá a solicitud de la parte interesada una vez reunidos los requisitos mínimos establecidos en el artículo 12 del referido Acuerdo, pero para ello es necesaria su desafiliación al régimen para que se pueda entrar a disfrutar de la misma.

En ese sentido, obra resaltar la diferencia existente entre los conceptos de causación y disfrute del derecho pensional, en tanto que el primero, corresponde al momento en el cual el afiliado reúne los requisitos de edad y semanas establecidos en la Ley de cara a consolidar el derecho a la pensión. En relación con el segundo, este se produce cuando satisfechos los requisitos mínimos, el afiliado eleva la reclamación tendiente a que le sea reconocido el derecho, **previa desafiliación del Sistema**.

Así entonces, acorde a lo previsto en los artículos 13 y 35 del Acuerdo 049 de 1990 (decreto 758 de 1990), en principio el disfrute de la pensión se halla condicionado a la desafiliación formal del sistema. Sin embargo, la jurisprudencia especializada ha morigerado el alcance de estos preceptos señalando que, si bien la regla general sigue siendo la desvinculación como requisito para comenzar a percibir las pensiones, en algunas situaciones especiales, se amerita realizar reflexiones particulares que deben ser advertidas por los jueces, derivando así del comportamiento del afiliado la intención cierta de desafiliarse del sistema, pese a no existir formalmente la novedad de retiro (CSJ SL5603-2016), lo que se ha reconocido *verbigracia* en situaciones tales como: *i) cuando de la conducta del afiliado se*

*denota su intención de no seguir cotizando (CSJ SL, rad. 35605, 20 oct. 2009, SL5603–2016, SL 9036–2017 y SL900–2018); ii) cuando deja de cotizar y solicita el reconocimiento de la prestación o de la indemnización sustitutiva (CSJ SL1742-2020); iii) en los casos en que precisa continuar cotizando por la renuencia de la entidad administradora a reconocer la prestación solicitada oportunamente y con el lleno de requisitos legales, caso en el cual se ha estimado que procede el reconocimiento de la prestación desde este último evento (CSJ SL, 1º sep. 2009, rad. 34514; CSJ SL, 22 feb. 2011, rad. 39391; CSJ SL, 22 feb. 2011, rad. 39391; CSJ SL, 6 jul. 2011, rad. 38558; CSJ SL, 15 may. 2012, rad. 37798).*

En el caso en estudio, se observa que en su condición de beneficiaria del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, la señora **MARÍA ADALGISA ARAQUE BARRERA** alcanzó la edad de 55 años el **3 de junio de 2005** (f. 12 Archivo 02 ED), y efectuó cotizaciones a través de su último empleador, IRMA DEL CARMEN CANASTERO MONTOYA, hasta el ciclo de **noviembre de 2016**, fecha para la cual acumulaba un total de 1.263,43 semanas según el último conteo realizado en la Resolución SUB 268 del 2 de enero de 2020 (f. 36 a 42 Archivo 02 ED).

Acto seguido, la actora elevó la reclamación pensional el **28 de marzo de 2019**, petición esta que, si bien fue resuelta de manera favorable por **COLPENSIONES** en Resolución SUB 144874 del 10 de junio de 2019, dispuso que el disfrute de la prestación solo se haría efectivo a partir del **1 de junio de 2019**, ante la falta de reporte de la novedad de retiro por cuenta de su última empleadora, disponiendo su inclusión en nómina de dicho mes, pagadera en julio de 2019 (f. 28 a 32 Archivo 02 ED).

En ese sentido, al concatenar las circunstancias fácticas que envuelven la situación de lo demandante con lo señalado en el precedente jurisprudencial reseñado, emerge que, como lo definió el Juez de primer grado, la accionante tenía derecho al disfrute de la pensión desde el 1 de diciembre de 2016, y no desde junio de 2019, como erradamente lo resolvió **COLPENSIONES** en su momento, ya que al haber satisfecho la totalidad de requisitos, su actitud se encaminó por procurar, primero, la consolidación del derecho pensional, emprendiendo las acciones jurídicas en contra de su última empleadora a efectos de obtener el pago del cálculo actuarial correspondiente a los aportes pensionales dejados de cancelar en su favor entre **1995 y noviembre de 2016**, causa litigiosa seguida ante el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín con Rad. 005-2017-536, en la cual también se convocó a **COLPENSIONES**, culminada con acuerdo conciliatorio plasmado en Acta del 16 de abril de 2018 (f. 46 a 48 Archivo 02 ED), en el que se concretó lo siguiente:

**RESUELVE**

**PRIMERO:** Aprobar en todas sus partes, la conciliación total realizada por **MARÍA ADALGISA ARAQUE BARRERA** identificado con cédula de ciudadanía No 32.506.782, coadyuvado por su apoderada judicial SOR TERESITA TORO QUINTERO, con tarjeta profesional 55.991 del CS de la J, respecto de la totalidad de las pretensiones frente a la señora **IRMA DEL CARMEN CANASTERO MONTOYA**, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 42.882.316, en calidad de demandada y coadyuvada por su apoderado, doctor **JOHN ALEXANDER ZULUAGA TORO**, identificado con tarjeta profesional No. 136.953 CS de la J, con la presencia de la señora **ELVIA DE JESÚS MONTOYA DE CANASTERO**, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 21.347.304 y de **COLPENSIONES**, representado por la apoderada judicial la Dra. **SANDRA MILENA NARANJO SALAZAR**, identificada con tarjeta profesional N° 225.677 toda vez que el acuerdo logrado no lesiona derechos ciertos e indiscutibles reclamados por el demandante.

**SEGUNDO:** Impartir al acuerdo total logrado por las partes, los efectos propios de la cosa juzgada y del mérito ejecutivo de las obligaciones claras, expresas y exigibles, de conformidad con el artículo 422 del Código General del Proceso y demás normas concordantes.

**TERCERO:** sin costas en esta instancia.

**CUARTO:** Ordenar la terminación del presente proceso por conciliación total de las pretensiones, se ordena la expedición de copias de la presente diligencia para cada una de las partes, se ordena emitir el oficio correspondiente a la entidad respectiva, así como el archivo del proceso y la realización de las desanotaciones respectivas.

Se adiciona la señora **IRMA DEL CARMEN CANASTERO MONTOYA** admite como parte de esta conciliación que la relación que hubo entre ella y la señora **MARÍA ADALGISA ARAQUE BARRERA** comprende el periodo de 1995 a noviembre 2016, admite que la modalidad del contrato es verbal y a término indefinido.

Acto seguido, previa gestión ante al ahora demandada para la liquidación del valor del cálculo actuarial, el pago de este se materializó en el 28 de diciembre de 2018, conforme se observa de la casilla de fecha de pago en cada una de las mensualidades cubiertas con este, dato precisado en la historia laboral actualizada de la actora aportada de folios 13 a 27 Archivo 02 ED. Agotado lo anterior, una vez reportadas las cotizaciones en su histórico de semanas, la señora **ARAQUE BARRERA** elevó la reclamación administrativa con miras a acceder al derecho pensional el 28 de marzo de 2019 (f. 28 a 33 Archivo 02 ED), actitudes que, sumadas al hecho que después del 30 de noviembre de 2016 no se reportan más cotizaciones o controversias con empleadores distintos por periodos posteriores al ciclo en comento, no dejan duda de que su intención era la de no continuar vinculada al sistema en condición de cotizante.

Luego, no tiene asidero lo peticionado en la alzada en el sentido de disponer el pago del retroactivo desde el reporte de la novedad de retiro o la primera semana del mes de noviembre, pues más allá de que exista un reporte en el ciclo de octubre de 2016, lo cierto es que medios probatorios como la historia laboral y el acuerdo de conciliación descrito en precedencia, muestran que la obligación del empleador omiso se extendió hasta el 30 de noviembre de 2016 (f. 28 a 33 y 46 a 48 Archivo 02 ED), calenda registrada como último ciclo de cotización completo, cuestión relevante si se tiene en cuenta que antes de esta no hubo gestión de ninguna clase con el objetivo de pensionarse, lo que permite considerar aquel limite temporal a efectos de definir el momento del disfrute pensional, sin que haya lugar a modificar la decisión asumida en este aspecto.

En ese sentido, acertó el Juzgado al concluir la procedencia del retroactivo en favor de la demandante, causado a partir del 1 de diciembre de 2016 y hasta el 31 de mayo de 2019, en tanto el reconocimiento pensional en sede administrativa se dispuso desde el 1 de junio de 2019. Así mismo, revisadas las sumas impuestas a cargo de la demandada (\$26.095.460), considera la Sala que los valores calculados en primer grado no lesionan el patrimonio de **COLPENSIONES**, debiendo confirmarse la decisión en este aspecto.

DESDE	HASTA	NÚMERO MES	MESADA	RETROACTIVO
1/12/2016	31/12/2016	1	\$689.455	\$689.455
1/01/2017	31/12/2017	14	\$737.717	\$10.328.038
1/01/2018	31/12/2018	14	\$781.242,00	\$10.937.388
1/01/2019	31/05/2019	5	\$828.116,00	\$4.140.580
TOTAL RETROACTIVO				<b>\$26.095.461,00</b>

En relación con los intereses moratorios, debemos indicar que el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, dispone que en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata dicha ley, el fondo de pensiones estará en la obligación de reconocer al pensionado, además de la obligación a su cargo, los intereses moratorios vigentes a la fecha en que se efectúe el pago.

Con relación a la fecha a partir de la cual se deben conceder tales intereses, contrario a lo aducido por la apelante, por vía jurisprudencial se tiene establecido que estos se causan una vez vence el plazo que por ley tiene la entidad de seguridad social para resolver la

**solicitud del derecho.** Así lo señaló la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, entre otras, en sentencias SL-11750 de 2014, SL-13670 de 2016 y SL-4985 de 2017.

En el presente asunto, se trata de una pensión de vejez, por lo que de conformidad con el artículo 9° de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 33 de la ley 100 de 1993, **los fondos administradores de pensiones cuentan con un término máximo de cuatro (4) meses para resolver las solicitudes atinentes a este derecho.**

Ahora bien, el Juez de primera instancia negó los intereses peticionados, tras argumentar que, si bien **COLPENSIONES** había negado el pago del retroactivo, dentro de los actos administrativos explicó el procedimiento que debía seguir la actora, si era su interés obtener su cancelación, actitud por la cual consideró, no había mala voluntad o mala fe de la entidad para hacerse merecedora de la obligación de asumir estos réditos.

No obstante, el principal reparo que tiene ese discernimiento es que, los intereses del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, tienen carácter resarcitorio y no sancionatorio, por lo que, generalmente, no hay lugar a realizar esa clase de análisis en estos casos, ya que solo basta la tardanza para su causación (CSJ SL10728-2016, CSJ SL662-2018 y CSJ SL1440-2018). Sin embargo, la Jurisprudencia Laboral ha decantado una serie de situaciones en las cuales no es dable imponer el pago de estos réditos al deudor del derecho social. Así lo reiteró recientemente en Sentencia SL4171-2021, en la que dijo:

*“(…) Si bien, la jurisprudencia ha considerado que existen situaciones excepcionales, a partir de las cuales no resultan viables los intereses y el deudor puede ser relevado del pago, la razón esgrimida por la enjuiciada y avalada por el fallador de segundo grado, no es precisamente una de ellas. **En primer lugar, cuando hay controversia entre potenciales beneficiarios de la pensión de sobrevivientes (CSJ SL14528-2014); además, cuando la negativa se fundó en la norma vigente a la fecha en que se resuelve la reclamación, «y después se reconoce la pensión en sede judicial con base en criterios de orden jurisprudencial, como por ejemplo el principio de la condición más beneficiosa» (CSJ SL787-2013); y por último, cuando a la fecha de la solicitud de la prestación, el afiliado no reúne el número de semanas para obtener el derecho pensional (CSJ SL2590-2020). (…)**”* (Negrilla y Subraya de la Sala).

Sin embargo, en el particular encontramos que la negativa de las mesadas solicitadas no se adecuaba a ninguno de los supuestos establecidos en la Jurisprudencia, pues si bien la demandada esbozó como sustento de su posición la falta de novedad de retiro, la línea Jurisprudencial en este ámbito, indicando las circunstancias que debe analizar la administradora de pensiones a efectos de definir la fecha del disfrute de la mesada, a falta de ese reporte, ha hecho carrera en el Alto Tribunal por más de una (1) década, por lo que no puede decirse que la postura aplicada en este sentido cambia de manera posterior a la decisión administrativa, la aplicación del criterio legal utilizado para definir los reclamos de la demandante, máxime cuando aquella había expuesto con total suficiencia las particularidades de su situación, y el trasegar agotado para llegar hasta la reclamación de su pensión, de lo cual, incluso, hizo parte la entidad, dado que participó del primer proceso judicial iniciado por la accionante, y elaboró el calculo actuarial correspondiente a las cotizaciones en su favor.

En ese contexto, se tiene que la señora **MARÍA ADALGISA ARAQUE BARRERA** elevó la solicitud de pensión de vejez el 28 de marzo de 2019, conforme se extrae de la Resolución SUB 144874 del 10 de junio de 2019, con la que **COLPENSIONES** concedió

tal prestación desde el 1 de junio del 2019 (f. 28 a 33 Archivo 02 ED). Posteriormente, 6 de noviembre de 2019, la actora solicitó el pago del retroactivo adeudado desde el 30 de noviembre de 2016, petición despachada de manera desfavorable en la Resolución SUB 268 del 2 de enero de 2020 (f. 36 a 42 Archivo 02 ED).

Puestas de ese modo las cosas, resulta evidente para la Sala la tardanza injustificada en el reconocimiento de las mesadas adeudadas a la demandante desde el 1 de diciembre de 2016 hasta el 31 de mayo de 2019, a las cuales le asistía derecho desde la primera reclamación, pues incluso en el acto administrativo de reconocimiento, la entidad coligió que la consolidación del derecho prestacional del actor venía desde mucho antes, configurándose entonces, la mora en el otorgamiento de la prestación desde cuando debió concederse la misma, razón suficiente para revocar la decisión de primer grado en este tópico, en tanto emerge que le asiste a la accionante derecho al pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, desde el **29 de julio de 2019**, pues cumple recordar que estos comienzan a correr **vencidos los cuatro (4) meses posteriores** a la primera reclamación que se elevó el 28 de marzo de 2019 (SL4985-2017, SL3130-2020, SL3552-2021), hasta el momento en que la entidad concurra a pagar las mesadas adeudadas.

Valga aclarar que, tanto el retroactivo como los intereses moratorios reclamados no están afectados por prescripción, como quiera que, la pensión le fue reconocida a través de la Resolución SUB 144874 del 10 de junio de 2019, y el 6 de noviembre de 2019 la actora reclamó el pago de las mesadas adeudadas, solicitud que solo vino a ser resuelta en la Resolución SUB 268 del 2 de enero de 2020 (f. 36 a 42 Archivo 02 ED), para más adelante presentar la demanda originaria del presente proceso el 27 de julio de 2020 (Archivo 01 ED), coligiéndose que no alcanzó a consolidarse el plazo trienal establecido para la operancia de la figura extintiva.

Por último, en cuanto a la oposición a la condena en costas de primera instancia por parte de **COLPENSIONES**, considera la Sala que tampoco le asiste razón en sus argumentos, como quiera que esta carga simplemente constituye una consecuencia procesal impuesta a quien termina siendo vencido en la contienda judicial, conforme lo estipulado en el artículo 365 CGP, y no reviste la obligación de analizar actuaciones de buena o mala fe, como lo pretende alegar su apoderado. Además, solo basta con revisar el curso del proceso para advertir sin mayor dificultad, su resistencia a la prosperidad de las pretensiones, proponiendo incluso excepciones de mérito.

Así las cosas, habrá de revocarse parcialmente los numerales segundo y cuarto de la sentencia de primer grado, para en su lugar, condenar a **COLPENSIONES** a reconocer y pagar los intereses moratorios reglados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, sobre el retroactivo de mesadas adeudado, interés causado desde el 29 de julio de 2019 hasta la fecha efectiva de su pago. Se confirmará en lo demás la sentencia recurrida. Sin costas en esta instancia ante la falta de prosperidad de los recursos de las partes.

Sin que sean necesarias más consideraciones, la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

**RESUELVE**



**PRIMERO: REVOCAR** parcialmente los numerales SEGUNDO y CUARTO de la Sentencia del 15 de febrero de 2022, proferida por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín, para en su lugar:

- **CONDENAR a COLPENSIONES** a reconocer y pagar en favor de la señora **MARÍA ADALGISA ARAQUE BARRERA** los intereses moratorios reglados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, causados sobre el retroactivo de mesadas adeudado, y liquidados desde el 29 de julio de 2019 hasta la fecha efectiva de su pago.

**SEGUNDO: CONFIRMAR** en lo demás la providencia apelada.

**TERCERO: Sin COSTAS** de segunda instancia.

**NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE**

Los Magistrados,

  
MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA  
Magistrada

  
VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO  
Magistrado

  
SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE  
Magistrada